

al Gobierno general como reemplazo para cubrir las bajas del ejército, y mandando que en su caso se comuniqué á quien corresponda para que el amparado sea restituido al goce de la libertad de que está privado.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Julio treinta y uno de mil ochocientos setenta y dos.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por D. Jesús Gutierrez y Berduzco, como apoderado de D. Guadalupe Barragan, contra el alcalde 6º constitucional de Querétaro, como ejecutor del acto por el que se cobran costas á Barragan en un juicio verbal que en su contra promovió el Lic. D. Luis Garfias.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que aparece del expedientillo que se ha acompañado por vía de justificación al informe de la autoridad, cuyo acto de exigir costas judiciales ha sido reclamado, cómo en efecto se cobran estas al C. Guadalupe Barragan, conforme á los artículos 2º, cap. 4º y 3º, cap. 4º y 1º, y 6º, cap.

4º del arancel vigente. La cantidad pedida asciende á ochenta y cuatro pesos. Los motivos de estos gastos, son: derechos causados con la receptoría; derechos de dos asesores que intervinieron en el juicio verbal que el C. Lic. Luis Garfias siguió contra el referido Barragan.

El artículo 17 de la Constitución, dice: "Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia. Esta será gratuita, quedando, en consecuencia, abolidas las costas judiciales."

En el caso presente, es y debe ser neta la aplicación del principio anterior sin detenernos en sus consecuencias. No cabe la menor duda de que se siguen inconvenientes para la administración de justicia llevando el principio asentado hasta los asesores nombrados por las partes, á quienes se obligaría así á prestar servicios sin la debida retribución; pero también es cierto que el Estado tiene que retribuirlos, para que sea una verdad el mandamiento constitucional.

Viene aquí naturalmente una dificultad: ¿tienen los Estados la precisa obligación de poner y mantener á disposición de las partes un número indefinido de jueces y asesores; cuando son recusados ó se recusan los que tienen sueldo fijo y están puestos para administrar justicia gratuita? ¿Cumplen aquellos con el precepto constitucional, con tener ciertos jueces expeditos para administrar justicia sin estipendio alguno que venga de las partes?

Los árbitros son jueces escogidos por los litigantes, sin que tengan relación alguna con el artículo 17 de la Constitución. Sucede igualmente, que el art. 54 de la ley de procedimientos judiciales del Estado de Querétaro, previene que: "En cualquiera causa civil ó criminal entre partes, quedan estas en libertad, precisamente de comun acuerdo, para pedir que el alcalde consulte con cualquiera abogado á costa de ellas."

Y esto ha sucedido en el juicio que nos ocupa.

En cuanto á las costas causadas por rectoría, es claro que solo á falta de escribano pudieron ponerse testigos de asistencia, y que el Estado debe de dotar á los Juzgados del número suficiente de aquellos ó de estos para que actúen, y él mismo tiene que retribuirlos.

Por estas consideraciones el Promotor fiscal pide: 1º: se conceda el amparo interpuesto por lo que toca á las costas exigidas, con excepcion de las devengadas por los asesores: 2º: que se abra á prueba este juicio por el término de la ley, mandando al promovente reponga este papel con el sello quinto que corresponde, atenta la cuantía del negocio.

Querétaro, Junio 15 de 1872.—*Luis Castañeda.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Querétaro, Julio 17 de 1872.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Juez G. Berduzco, como apoderado del C. Guadalupe Barragan contra los actos del juez 6º constitucional de Paz de esta capital, en virtud de los cuales ha cobrado costas judiciales y librado ejecucion por ellas, con lo cual cree el quejoso haberse violado el artículo 17 de la Constitucion general de la República, que prohíbe esas costas; el informe rendido por dicho juez que obra á fojas 6 de este expediente; el pedimento fiscal que se ve á la 8; el auto del 6 del próximo pasado Junio, por el cual se mandaron suspender las providencias reclamadas; el 2º informe del propio juez que consta desde la foja 11 hasta la 14, así como el otro pedimento fiscal formado en vista de lo informado; las pruebas rendidas y alegato del actor; la citacion para sentencia; y todo lo demas que verse y tenerse presente convino. Considerando 1º: que la Cons-

titucion general de la República es la Suprema ley y que sus preceptos deben ser fielmente observados, cualquiera que sea la disposicion que exista en contrario y la autoridad que la haya dictado. 2º: que siendo disposicion terminante y expresa de dicha Constitucion que la justicia se administre gratis y no se cobren costas judiciales, cuya garantía y prohibicion de cobro de costas está consignado en el artículo 17 de ese código constitucional que citó el quejoso. 3º: que la ley de este Estado de Querétaro, de 3 de Noviembre de 1868, á la cual se acoge el juez 6º, para haber cobrado y exigido esas costas, de ninguna manera puede embarazar el precepto constitucional que prohíbe las costas; porque el artículo 126 de esa Constitucion tantas veces citada, ordena y manda que los jueces se sujeten á las prescripciones de estas, aun cuando la de los Estados y sus leyes manden lo contrario. 4º: que el hecho de ese cobro de costas y ejecucion librada para hacerlas efectivas, está suficientemente comprobada.

Considerando, por último: que el artículo 8º de la ley de amparo de 20 de Enero de 1869, que dispone no los hay en negocios judiciales, no tiene tanta extension que bajo ningun caso y circunstancia pueda tener lugar el amparo en negocios de esa clase; porque dándose dicho recurso siempre que haya garantía constitucional violada, y no pudiendo algunas de estas violarse mas que por jueces y en negocios judiciales, como sucede en el presente caso, y otros muchos semejantes, si ese artículo se extendiera comprendiendo en la prohibicion esas garantías precisamente concedidas para contener á los mismos jueces en cualquier abuso de su autoridad y reparar prontamente el daño que con él se causa á un hombre; seria no solo nulificarse tales garantías, sino hasta cierto punto dar lugar á que esas garantías se violaran, lo que constantemente está fue-

ra del espíritu del artículo 8º referido. Por tales considerandos, y con fundamento del artículo 101 de la Constitución general, fallo que debía declararse y se declara: que la Justicia Federal proteja y ampara al C. juez G. Berduzco contra los actos y determinaciones del C. juez 6º Constitucional de paz, en lo relativo á costas judiciales y embargo que libró para hacerlas efectivas. Así definitivamente juzgando lo pronunció, mandó y firmó el C. juez 3º suplente del Juzgado de Distrito de este Estado de Querétaro, Lic. Francisco Villaseñor, ordenando se hagan á las partes las notificaciones correspondientes, y que se eleve este expediente en revision á la Suprema Corte de Justicia de la Nación: doy fé.—*Francisco Villaseñor.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 31 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro, por Don Jesus Gutierrez y Berduzco, como apoderado de D. Guadalupe Barragan contra el alcalde 6º constitucional de Querétaro, como executor del acto por el que se cobran costas á Barragan en un juicio verbal que en su contra promovió el Lic. D. Luis Garfias, y considerando: que el acto reclamado importa la violacion de la garantía individual establecida por el art. 17 de la Constitución federal, se decreta: que se confirma el auto pronunciado el 17 del actual por el juez de Distrito de Querétaro, que declara: que la Justicia federal ampara y protege al C. José G. Berduzco contra los actos y determinacion del C. juez 6º constitucional de paz, en lo relativo á costas judiciales y embargo que libró para hacerlas efectivas.

Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certifi-

cada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Agosto 3 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Tabasco por el C. Juan Antonio Macdónel á nombre de María Higinia Cornelio y Rosario Damian, contra el Gefe político de San Juan Bautista, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez:

El Fiscal dice: En el pedimento número 995, ha expuesto este Ministerio, con toda claridad su opinion acerca del recurso de amparo que han promovido las Sras. Mª Higinia Cornelio y Rosario Damian, contra la providencia de la Gefatura política que privó á la primera del derecho de tener á sus hijos menores, dada la prision de su esposo el C. Francisco Damian.

Por el informe justificativo dado por la autoridad responsable, se dice: que las Sras. Rosario Damian é Higinia Cornelio, se hallan detenidas para esclarecer los hechos de culpabilidad de homicidio que resulta contra el C. Francisco Damian; y que para evitar que se pusiesen de acuerdo, se han puesto á ellas y á sus hijos en diferentes casas, en donde se hallan á disposicion del Juzgado de 1ª instancia, que es el juez del conocimiento